

+ Reportaje

**Secretario Ejecutivo de
CONEVAL:**

**“La desigualdad tiene
que combatirse
desde estrategias
territoriales”**

Pág. 2



Foto Curt Carnemark / World Bank



Foto Mariana Ceratti World Bank



Foto Neil Palmer - Ciat

+ En este número

Nota *Pág. 5*
Taller FIDA en Roma:
Diálogo político, de la visión a
la acción

Reportaje *Pág. 8*
Chile: Nueva Agenda
Regional

Entrevista Proyecto *Pág. 11*
Inversiones Agroindustriales:
¿Un instrumento para la
cohesión territorial?

Publicaciones *Pág. 14*
Documentos de Trabajo
programa Cohesión Territorial
para el Desarrollo

Agenda *Pág. 16*

El programa Cohesión Territorial para el Desarrollo busca contribuir al cambio institucional y de políticas para crear mayores oportunidades y capacidad en los territorios no metropolitanos para expresar su potencial de desarrollo y que esto redunde en la reducción de las desigualdades territoriales. Es decir, en un país territorialmente cohesionado dará lo mismo el lugar en que se nace y se crece, porque en todos los territorios existirán similares oportunidades y calidad de vida.

El programa, coordinado por Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, será ejecutado por una red de socios y organizaciones en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Perú.

Ellos estudiarán en profundidad alguna de las causas de la desigualdad territorial y los costos de ésta para la sociedad, además de dialogar e interactuar con todos aquellos que tengan la voluntad de materializar soluciones.

www.rimisp.org/ctd

Síguenos en:



Coordinado por:



Financiado por:



Contacto:
Diego Reinoso
Coordinador Comunicaciones
Programa Cohesión Territorial
para el Desarrollo
dreinoso@rimisp.org
+56 2 2236 4557



*Secretario Ejecutivo de
CONEVAL:*

**“La desigualdad
tiene que combatirse
desde estrategias
territoriales”**

En entrevista para este boletín, el Dr. Gonzalo Hernández Licona se refiere a la situación actual de México en relación con los niveles nacionales de pobreza y de desigualdad territorial y aborda algunas estrategias para ir avanzando en soluciones a estas problemáticas.

El directivo del CONEVAL enfatiza la importancia de que las políticas públicas referidas a pobreza y desigualdad territorial tengan “un enfoque de derechos sociales”, junto con calificar al crecimiento económico y a la mejora en los niveles de productividad como “los elementos más relevantes” para reducir la pobreza en México.

El [Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social \(CONEVAL\)](#) tiene por objetivo evaluar la política y los programas de desarrollo social que se implementan en México, junto con sugerir mejoras al respecto, y además es la institución encargada de medir la pobreza en el país. Su Secretario Ejecutivo es el economista Gonzalo Hernández Licona, quien asumió el cargo desde la creación del organismo, en 2006.

Las últimas cifras informadas por el CONEVAL sobre medición de pobreza para el año 2012 indican que 53,3 millones de mexicanos están en situación de pobreza, es decir, más del 45% de la población nacional. Además, los estudios e investigaciones en ese ámbito reflejan la existencia de territorios que registran enormes rezagos de oportunidades, de bienestar y de ejercicio de derechos sociales en comparación a los de mejores niveles.

Hernández Licona indica que un tema clave en el que debe ponerse énfasis para reducir estas brechas es que “la política

pública debe tener un enfoque de derechos sociales. “La Constitución y la Ley General de Desarrollo Social ponen a los derechos sociales como el elemento más importante, como guía hacia donde México debe ir. Dado que la medición de pobreza que tenemos en el CONEVAL tiene un enfoque de derechos sociales, es lógico que la política pública deba tener este mismo enfoque”, agrega.

A su vez, esto implica instaurar estrategias generales para que la población tenga, por un lado, acceso a derechos sociales y programas focalizados que ayuden a que la población que tiene condiciones de pobreza o pobreza extrema reciban los apoyos necesarios para acceder a estos derechos sociales.

“En México, el crecimiento económico ha sido muy pobre, con cerca de un 1,4% per cápita anual promedio entre 1990 y 2012. Será muy difícil que reduzcamos la pobreza si no tenemos un mayor crecimiento económico y un aumento de la productividad.



“La desigualdad tiene que combatirse desde estrategias territoriales (...) Si no invertimos en territorios en pobreza y en territorios desfavorecidos, la desigualdad va a crecer de manera importante”

Las estrategias del CONEVAL

Hernández Licona especifica que para avanzar en estrategias contra las desigualdades territoriales, el CONEVAL está poniendo el acento para que el gobierno cuente con estrategias territoriales que apoyen a los municipios con mayor porcentaje de pobreza (Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca), con el objetivo de dotar a la población de estos territorios de “estructuras básicas”.

No obstante ello, recalca, los municipios urbanos también son importantes, pues, si bien tienen un porcentaje menor de pobreza, el volumen de pobreza es muy grande “y por eso queremos que haya estrategias económicas y sociales para reducir los niveles de pobreza. Estas son sugerencias concretas que hemos hecho en el CONEVAL y en nuestros informes bienales de evaluación de la política social hemos comentado estos puntos”.

En esa línea, destaca, el gobierno que entró en funciones en enero de este año ha retomado muchos de los diagnósticos del CONEVAL, como por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo y la Cruzada Nacional contra el Hambre, con varios de los elementos de diagnósticos y recomendaciones elaboradas por el organismo. “Es bueno subrayar que la información del CONEVAL se está tomando en cuenta para generar política pública”, comenta.

En México, la Ley General de Desarrollo Social prevé que el grado de cohesión social debe incorporarse en la medición de la pobreza. ¿Cómo incorpora CONEVAL el contexto territorial y la cohesión social en los criterios de medición de la pobreza y en la evaluación de la política social?

“La Ley nos pide incluir la cohesión social, que es muy importante, pero al mismo tiempo es difícil entender y definir el concepto, por eso es que el CONEVAL trabajó mucho en tener lo que hoy tenemos para la medición de cohesión social a nivel territorial. Estamos usando tres tipos de indicadores. Primero, el de desigualdad de ingreso, entendiendo desigualdad como lo contrario a un país que no está cohesionado. Un segundo indicador, es el de polarización social que nos dice qué tanto conflicto posible existe con una población con dos o tres polos fuertes. El tercer elemento que incluimos es la acción de las redes sociales de apoyo, en el sentido de apoyos que las familias de esas personas sienten que tienen desde su entorno, cuando por ejemplo, tienen que pedir prestado dinero o tiene que dejar encargados a sus hijos para ir a trabajar”.

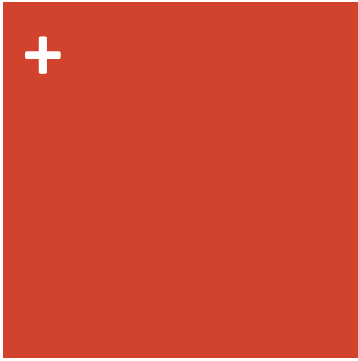
Estos son dos de los elementos más relevantes para poder reducir la pobreza y la pobreza extrema en el país”, subraya.

Hernández Licona plantea que “la gran pregunta” es cómo generar mayores niveles de crecimiento económico, aumento de la productividad y generación de empleos y sobre esto, lamenta que “no hemos logrado tener acuerdos políticos para crecer. Estamos ahora en plena discusión de reformas estructurales que puedan lograr mayor crecimiento, pero la discusión política ha estado muy complicada”.

En ese marco, el directivo del CONEVAL dice que una de las razones de esta falta de acuerdo puede residir en que no se ha logrado “diferenciar beneficios de corto plazo con los de largo plazo. En México nos hemos acostumbrado a pagar pocos impuestos y a recibir muchos beneficios del gobierno. Creo que el petróleo nos ha inhibido la obligación de pagar más impuestos y la obligación de ser más productivos. Pareciera que todos estamos esperando ese beneficio de corto plazo que nos da el petróleo, sin ver que un país debiera invertir en productividad, en incentivos a la productividad y en los ingresos de largo plazo. La situación descrita nos lleva a trampas de poco crecimiento”.

“La frase de ‘pan hoy, hambre para mañana’ es muy fácil de entender y refleja muy bien la idea. O la famosa ‘herencia de la abuela’. La familia se pelea la herencia, se la reparte y se la gasta, pero no invirtió en educación o en infraestructura. Luego, la familia se quedará sin los dineros de la herencia y con niveles de ingresos muy bajos. Eso nos puede pasar mañana sin el petróleo”, ejemplifica.

Sobre las soluciones posibles para esta problemática, el economista expresa que “en ningún país del mundo es fácil lograr este tipo de acuerdos, donde estamos diciendo que la gente o algún grupo tiene que pagar más hoy. En la reforma fiscal que en México se está trabajando es muy evidente ver esto. Mi impresión es que se necesitan muchos elementos de política y de convencimiento para poder contar con reformas que otorguen beneficios para todos, pero mañana, aunque los beneficios de hoy se reduzcan para muchos e incluso para todos”.



¿Qué rol debieran cumplir los tres niveles de gobierno y el sector privado en las acciones referidas a reducir las brechas de desigualdades territoriales en México?

“Los tres niveles de gobierno son importantes y se está cada vez reconociendo más ese elemento. La medición de pobreza del CONEVAL va a las tres órdenes de gobierno: medimos la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal con lo cual podemos saber que México tiene 53,3 millones de personas en pobreza, o que 11,5 millones están en pobreza extrema. Además podemos saber en qué estados de la República está esa población y en qué municipios de esos estados está la población en pobreza. En virtud de ello, suceden dos cosas: primero, se tiene información para una mejor planeación regional. Segundo, es una forma de evaluar lo que hacen los gobiernos locales en materia de pobreza y por lo tanto ya no es solo entonces el gobierno federal el responsable, sino que, a partir de esos datos, también los gobiernos locales, estatales y municipales. Por su parte, los agentes económicos privados son los principales actores en la generación de valor agregado y de generación de empleos. Si las empresas en México pudieran generar un mayor valor agregado, México sería un país mucho más rico. De igual modo, está la solidaridad de muchas empresas privadas con los temas sociales, con fundaciones privadas que apoyan y organizaciones de la sociedad civil que también son un elemento fundamental para apoyar las labores del gobierno sobre la población que está en pobreza”.

Investigaciones sobre desigualdades territoriales han propuesto una mayor ‘cohesión territorial’, entendiendo este concepto como el logro de cierta equidad de oportunidades, para que cada territorio pueda expresar su potencial y así reducir las brechas. ¿Cuál es su opinión en torno a este concepto y cómo el CONEVAL puede aportar a la concreción del mismo con su labor?

“El concepto me parece muy importante en el ámbito de que no sea el lugar en el cual se nace lo que determine el futuro de las personas. En este escenario hay retos muy difíciles para aquellas localidades donde viven unas pocas decenas de familias y ahí debemos pensar en forma más inteligente o pensar de manera diferente en cómo hacer ciudad de menor tamaño y no que se queden en localidades de 20 personas. Creo que la desigualdad tiene que combatirse desde estrategias territoriales. El CONEVAL aporta mucho, no solo porque medimos la pobreza a nivel municipal, sino porque también medimos elementos sociales o problemáticas sociales a nivel de localidad. Tenemos un indicador que se llama Índice de Rezago Social que sí puede estimarse a nivel localidad y lo tenemos también a nivel país. Es una herramienta muy útil para planear. Creo que las políticas territoriales son importantes para intentar igualar las oportunidades para la población. Por ejemplo, en México hay niños indígenas en localidades alejadas que van a escuelas de mala calidad. Esos niños difícilmente podrán competir con niños no indígenas con mayor ingreso y que van a escuelas de buena calidad. Entonces, si no invertimos en territorios en pobreza y en territorios desfavorecidos, la desigualdad va a crecer de manera importante. Respecto a los cuestionamientos de esta política, hay territorios en los cuales debemos invertir mucho, pero eso no significa no generar políticas de crecimiento económico nacional”.

+ Gonzalo Hernández Licona es Doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Posee el grado de Maestría en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra y la Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 1997 ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue Director General de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social de 2002 a 2005. Realizó labores de catedrático de tiempo completo del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México de 1991 a 1992 y de 1996 a 2002. Fue Director de la Carrera de Economía en la misma institución entre 1998 y 1999. De 1996 a 2000 fue Representante Académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.



Taller FIDA en Roma:

Diálogo político, de la visión a la acción

Encuentro reunió a expertos provenientes de América Latina, Asia, África y Europa que trabajan junto al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en diferentes proyectos y programas, quienes compartieron experiencias concretas de sus continentes, con miras a conocer herramientas, impactos, resultados y buenas practicas que favorezcan el ejercicio del diálogo de políticas.

El pasado 17 de octubre, el [Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola \(FIDA\)](#), llevó a cabo en la ciudad de Roma, Italia, el encuentro “Mainstreaming policy dialogue: from vision to action”. La iniciativa conjunta de la División para América Latina y el Caribe y la División de Asesoramiento Técnico y Políticas de FIDA, buscó contribuir a un debate más amplio respecto al rol del diálogo político como herramienta concreta de incidencia para que la población rural tenga mejores oportunidades de salir de la pobreza.

Como quedó de manifiesto durante el encuentro, el diálogo de políticas es una labor que se realiza a diario con comunidades, gobiernos locales, incluso a nivel de Presidentes de la República, pero que a veces es difícil de definir. Sin embargo, como señaló Josefina Stubbs, directora de la División para América Latina y el Caribe FIDA, “nos referimos al ejercicio de influencia a tomadores de decisiones para que ellos tomen acciones que vayan en beneficios de un sector en particular. En nuestro caso, el sector rural, los pequeños productores, los pequeños empresarios, en todos los países donde trabajamos; sectores que por muchos años se han mantenido excluidos de posibilidades de acceso, de recursos, de tierras, de voz, de tecnología y de conocimiento”.

Durante la jornada se trataron diferentes temáticas relativas al diálogo de políticas. La invitación a expositores fue a presentar sus experiencias para que estas pudieran entregar luces de cómo abordar el diálogo de políticas como una herramienta concreta de incidencia para potenciar el objetivo de los programas que impulsa FIDA.

“La iniciativa buscó contribuir a un debate más amplio respecto al rol del diálogo político como herramienta concreta de incidencia para que la población rural tenga mejores oportunidades de salir de la pobreza”

Uno de los aspectos claves de la discusión fue el rol del “análisis de políticas” para los procesos de diálogo, donde a través de la generación de conocimiento y levantamiento de información en diversas modalidades, como diagnósticos, estudios específicos y otros formatos atingentes a la realidad de cada país, se pueda contar con el conocimiento al servicio de una asistencia técnica enfocada y de un diálogo político de valor para los tomadores de decisión.

También se relevó la importancia de saber aprovechar las oportunidades que ofrece la coyuntura para la efectividad del diálogo. En América Latina “hay que estar alertas a la coyuntura porque es ahí donde se puede tener espacios de incidencia (...) Sin embargo, esto no sucede de la nada, más bien se construye desde una visión de largo plazo, donde hay que mantener alianzas, vínculos que en algún momento se pueden activar dependiendo de los que dicte la agenda pública”, planteó Tomás Rosada, economista regional de la División de América Latina del FIDA.

Asimismo, el FIDA desatacó la relevancia de generar metodologías que permitan evaluar los resultados del diálogo de políticas. “Hemos desarrollado un modelo de evaluación de resultados, estandarizando procesos y haciendo mediciones que nos permitan conocer y entender estas herramientas de manera de visualizar la incidencia real del diálogo de políticas y de los procesos que estamos utilizando en nuestro proyecto”, indicó Ignacia Fernández, Coordinadora Adjunta del recientemente finalizado [Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, de Rimisp](#).

La jornada contó con diferentes paneles donde se expusieron casos concretos de diálogo político, analizando las estrategias desarrolladas y los impactos obtenidos.



Mainstreaming policy dialogue: from vision to action
 WORKSHOP
 17 October 2013, IFAD Headquarters, Rome

Programme		
Opening session		9.00
Opening remarks	Josefina Stubbs, Director, Latin America and Caribbean Division Adolfo Brizzi Director, Policy and Technical Advisory Division	
Session 1		9.25
Introductory session		
Moderator: Paolo Siliveri		
Presentation on country-level policy engagement (CLPE) in IFAD	Ed Heinemann Senior Policy Advisor, Policy and Technical Advisory Division	
Response by discussants:	Ignacia Fernandez Coordinator, Rural Dialogue Group Álvaro Ramos Coordinator, FIDA MERCOSUR Jean Balis Team Leader, Policy Analysis, Monitoring and Evaluation, FAO	
Questions / Discussion		
Coffee break		11.00
Session 2		11.15
Sharing experience, drawing out lessons		
2A Creating an enabling policy environment for IFAD-supported projects		11.15
Moderator: Hoonae Kim		
Presentations:		
Mexico, Democratizing productivity: new discourse, new opportunity	Tomás Rosada Regional Economist, Latin America and Caribbean Division	
PROFIRA, Uganda, Getting the policy framework right for project implementation	Alessandro Marini Country Programme Manager, Uganda, East and Southern Africa Division	

Mainstreaming policy dialogue: from vision to action
 WORKSHOP
 17 October 2013, IFAD Headquarters, Rome

2B Scaling up successful project experiences through national policies		11.45
Moderator: Hoonae Kim		
Presentations:		
Brazil: From field experience to public policies: dialogue between national policy making and state level implementation (Don Helder Camara project)	Iván Cossio Cortez Country Programme Manager, Brazil, Latin America and Caribbean Division	
Egypt, West Noubaria Rural Development Project: taking forward the lessons learnt	Abdelhaq Hanafi Country Programme Manager, Egypt, Near East, North Africa and Europe Division	
Questions/discussion		12.15
Lunch break		13.00
2C Strengthening public policies/ institutions and enhancing their pro-poor focus		14.00
Moderator: Tomás Rosada		
Presentations:		
Strengthening the capacity of Ministries of Agriculture in Pro-Poor Policy Analysis and Formulation: IFAD's Epe rience in S lected Asian Countries	Ganesh Thapa Regional Economist, Asia and the Pacific Division	
REAF, Regional policy dialogue in MERCOSUR: impact on country-level public policies for rural poverty reduction and family farming	Guilherme Cassel Director, Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANERGSUL)	
2D Strengthening the policy capacity of national stakeholders		14.30
Moderator: Constanza di Nucci		
Presentations:		
CAPAD, Burundi: IFAD's partnership with a smallholder farmer organization in national-level policy dialogue	Jean-Philippe Audinet Senior Technical Advisor, Producers Organisations and Rural Development, Policy and Technical Advisory Division	
Shift in national policies in Ecuador and D Colombia: the G R's contribution	Manuel Chiriboga Executive Secretary, Rural Dialogue Group, Ecuador	
Questions/discussion		15.00

Mainstreaming policy dialogue: from vision to action
 WORKSHOP
 17 October 2013, IFAD Headquarters, Rome

Coffee break		15.45
Session 3		16.00
Monitoring, measuring effects and impact		
Moderator: Ed Heinemann		
Presentation o IFAD's pmerging apr oach	Constanza di Nucci Researcher, Statistics and Studies for Development Division	
Presentation on alternative approach	Margarida Rodrigues Post-Doctoral Fellow, Unit of Econometric and Applied Statistics of the European Commission	
Response by discussant	Oswaldo Feinstein Independent Consultant, Evaluation	
Questions / discussion		
Closing session		17.30
Pulling it together and next steps		
Moderator: Josefina Stubbs		
Synthesis remarks and way forward	Josefina Stubbs, Director, Latin America and Caribbean Division	
Remarks	Carlos Seré Associate Vice-President, Strategy and Knowledge Management Department	
Closing remarks	Kevin Claver Associate Vice-President, Programme Management Department	

Grupos de Diálogo Rural generando diálogo de políticas

Una de las experiencias de diálogo de políticas presentadas durante la reunión fue el proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, iniciativa que se lleva a cabo en México, El Salvador, Colombia y Ecuador, financiada por FIDA y el [Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo-Canadá \(IDRC en sus siglas en inglés\)](#) y coordinada por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Al respecto, Ignacia Fernández -coordinadora del proyecto- explicó que el proyecto en su primera etapa, 2010-2013, tuvo como objetivo “elevar la prioridad de la pobreza rural en la agenda política nacional, vinculando este tema a otros de alta prioridad en la agenda de cada país, mientras que para su segunda etapa, 2013-2016, se busca que los procesos proactivos y sistemáticos de diálogos de política puedan traducirse en contribuciones directas a las políticas y cambios institucionales que fomenten un entorno más favorable para el desarrollo rural y la superación de la pobreza”.

La investigadora subrayó que parte fundamental de la estrategia de diálogo de políticas del proyecto ha consistido en la creación en cada país de los Grupos de Diálogo Rural (GDR), integrados por personalidades influyentes del mundo social, empresarial, intelectual, organizaciones no gubernamentales (ONG) y del gobierno, cuyo objetivo ha sido generar conocimiento, diálogo e incidencia en políticas públicas rurales, de acuerdo con las condiciones y prioridades estratégicas de cada nación.



Foto Neil Palmer - Ciat

Durante la jornada se presentaron los resultados de los Grupo de Diálogo Rural de Colombia y Ecuador.

Los principales resultados del GDR Colombia se vieron reflejados al aportar significativamente en la redacción del proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, proyecto emblemático cuyos ejes estratégicos han estado puestos en la restitución de tierras a los desplazados del conflicto en dicho país. El Grupo también participó en las mesas regionales de trabajo para buscar la paz, convocadas por el Congreso de la República, y fue invitado como exponente en el Foro Agrario realizado en Bogotá, por solicitud de la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, haciendo aportes para la discusión en el tema agrario y rural. A su vez, en el marco de la reestructuración del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), se tuvo una participación activa en el diseño de la estrategia de apoyo a comunidades rurales que han recibido tierras.

En Ecuador, el foco estuvo puesto en la discusión y recomendaciones acerca de políticas específicas relativas al Plan Nacional de Semillas, planes agrícolas competitivos, Banco de Desarrollo Rural, Ley de Tierras y Educación Rural. Asimismo, reunieron a actores del sector agrícola de diferentes regiones para discutir iniciativas de gobierno y de interés de pequeños agricultores. Entre los resultados destaca el reconocimiento de la importancia de la provisión de bienes públicos, por ejemplo, para el plan de semillas de maíz, arroz y papas (por USD\$10 millones). Se reunieron actores públicos y privados para discutir la soberanía y seguridad alimentaria, lo que llevó a un nuevo sistema de apoyo a la leche en base a las exportaciones lácteas. Además, se reunió a cooperativas de ahorro y préstamo con el Banco de Desarrollo Rural, para trabajar una propuesta conjunta que se presentó a la oficina del Presidente de la República.

“El diálogo de políticas es una alternativa en la región para dar respuesta a la creciente demanda de participación en los asuntos públicos, como mecanismo que busca incidir en el diseño e implementación de la políticas públicas mediante la promoción del diálogo entre diferentes actores interesados del mundo político, empresarial y de la sociedad civil”, señaló Ignacia Fernández, destacando la importancia de generar debate en torno a los mecanismos de diálogo de políticas de manera de ir enriqueciendo las herramientas y con ello aportar a la disminución de las desigualdades territoriales en América Latina. 🇪🇺

Chile: Nueva Agenda Regional

Incidencia para políticas públicas con cohesión territorial



Iniciativa del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo de Rimisp reunió a destacados expertos en materia de desarrollo económico, social y de descentralización para generar diagnóstico y propuestas transversales para el desarrollo territorial chileno.

Se entregaron 57 propuestas a los candidatos presidenciales y al parlamento que compiten el próximo 17 de noviembre, con el objetivo de que incorporen iniciativas concretas en materia de desarrollo territorial en sus programas.

La ex presidenta Michelle Bachelet y candidata por la “Nueva Mayoría”, quien según las encuestas mantiene la primera intención de voto, incorporó un enfoque territorial y algunas de las iniciativas recomendadas por el proyecto Nueva Agenda Regional, en su Programa de Gobierno 2014-2018, principalmente en los capítulos de descentralización y de superación de la pobreza.



Hasta hace un par de años, la situación de las regiones de Chile era un tema lejano de la coyuntura nacional. Chile, con una arraigada cultura centralista, tiene la tendencia a dar solución a las problemáticas desde la capital, sin injerencia de los territorios en las decisiones que los afectaban. Sin embargo, las movilizaciones realizadas por las comunidades regionales de Aysén, Magallanes, Freirina, Quellón, Tocopilla y Tal-Tal, entre otras, comenzaron a generar un vuelco en la manera de observar los territorios.

Esta coyuntura y las elecciones que se desarrollarán el próximo 17 de noviembre, dieron la oportunidad a Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, para dar vida al [proyecto “Nueva Agenda Regional” \(NAR\)](#), como una iniciativa del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo.

El punto de partida del proyecto NAR es que en Chile no da lo mismo donde se nace, crece o trabaja, pues esta condición determina las oportunidades de desarrollo y de bienestar de cada persona. Con este diagnóstico, la Nueva Agenda Regional busca contribuir al cambio institucional y de políticas para crear mayores oportunidades y capacidad en los territorios para expresar su potencial de desarrollo, y que esto permita la reducción de las desigualdades territoriales.

Así, se desarrollaron un conjunto de propuestas en materia de desarrollo y cohesión territorial, con el objetivo de incidir en los candidatos presidenciales y al congreso, para que estos incorporen una mirada territorial y acciones concretas en esta materia en la agenda legislativa y en el plan de trabajo del próximo gobierno.

Los avances

El proyecto reunió a 15 destacados expertos -provenientes de diferentes instituciones universitarias y centros de pensamiento, además del propio Rimisp- en materia de desarrollo económico, social y de descentralización. Estos equipos generaron diagnósticos y 57 propuestas transversales para el desarrollo con cohesión territorial, las que se hicieron llegar a quienes compiten en las elecciones.

Desde el inicio del proyecto, se tuvieron reuniones para discutir las propuestas de Nueva Agenda Regional, con el candidato presidencial Franco Parisi; el jefe programático de la candidata Michelle Bachelet, Alberto Arenas; el jefe programático de la candidata oficialista Evelyn Matthei, Felipe Morandé. A los demás candidatos a la presidencia se les hizo entrega de las propuestas por escrito. En tanto, en el ámbito parlamentario, el tema ya ha sido discutido con el presidente del Senado, Jorge Pizarro; los representantes de la Cámara Alta Juan Pablo Letelier, Carlos Bianchi y Antonio Horvath, además, de la diputada Carolina Goic.



Las propuestas fueron socializadas además con la ciudadanía a través de una serie de seminarios realizados con las universidades regionales de Los Lagos en Osorno, Católica del Norte en Antofagasta y de Talca, junto a la participación de representantes de diversos ámbitos del quehacer de esos territorios, quienes complementaron y opinaron sobre el material desarrollado por los expertos.

La [Nueva Agenda Regional](#) contó también con el apoyo de la Fundación Democracia y Desarrollo para la realización del seminario final en Santiago y a través de la plataforma [El Quinto Poder](#), ligada a esta Fundación, quienes pusieron a disposición de la ciudadanía las propuestas para que fueran votadas y comentadas.

Adicionalmente, las iniciativas fue difundida a través de una activa agenda comunicacional, tanto a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, como de prensa escrita, radio y televisión. Al momento de redactar esta nota, se habían generado más de 180 publicaciones en prensa escrita y on line, 31 apariciones en programas de radio y más de una decena de entrevistas en televisión.

Según explica el Coordinador del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo, Julio Berdegué, todas estas acciones apunta a que “en el nuevo gobierno se tome en serio y con fuerza una agenda política que busque el objetivo del desarrollo con cohesión territorial; esto es, que las personas en cada territorio tengan similares oportunidades de desarrollo, que ningún territorio tenga niveles de bienestar por debajo de los mínimos que como sociedad consideremos indispensables, y que además exista una convergencia rápida para que las grandes brechas de hoy se reduzcan hasta niveles compatibles con el de una sociedad que aspira a considerarse desarrollada”.

En esta línea, las propuestas producidas por la Nueva Agenda Regional ya han tenido repercusiones a nivel de programas de los candidato presidenciales. Así por ejemplo, la elección de Intendentes es un compromiso adquirido por ocho de los nueve postulantes.

Sin embargo, donde ha existido un mayor nivel de incidencia y empatía con el tema ha sido en el Programa de Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y actual abanderada de la Nueva Mayoría, quien según las encuestas tiene la primera opción de llegar por segundo periodo a La Moneda.

De esta manera, según advierte desde la Nueva Agenda Regional su secretaria ejecutiva, Danae Mlynarz, “los avances concretos que vemos en el Programa de Gobierno de la candidata Michelle Bachelet y en las referencias que han hecho otros postulantes, nos entrega luces que el tema del desarrollo y la cohesión territorial tendrá plena cabida en las políticas públicas del próximo gobierno”.

Programas de Gobierno con mirada territorial

“Una de las mayores desigualdades que enfrentamos en el país es de carácter territorial (...) También son demasiado distintas las oportunidades que enfrentan las personas dependiendo del lugar donde nacen y residen”. Con este texto comienza el capítulo dedicado a la descentralización del Programa de Gobierno 2014-2018 de la candidata presidencial Michelle Bachelet.

En el detalla que “vamos a potenciar las oportunidades económicas de las regiones de Chile”. Este compromiso queda establecido incluso desde los cambios constitucionales a los que apuesta la abanderada de la Nueva Mayoría, donde establecerá gobiernos regionales liderados por jefes ejecutivos elegidos por votación directa, los que dispondrán de autonomía, facultades y recursos para el desarrollo de sus territorios.

El desarrollo económico regional contará con mecanismos, atribuciones y recursos para desplegarse, “buscando una eficaz cooperación público privada para fortalecer la competitividad del territorio y la inclusión social y económica de sus habitantes”. Por esto, habrá un traspaso de competencias en materia de desarrollo productivo e innovación, creando los Programas Tecnológicos de Inversión, con la participación de las universidades regionales y los Consejos Regionales.

Para fortalecer el desarrollo de los territorios, se incrementará el gasto público regional y se generará información presupuestaria regional, incluyendo el detalle de los presupuestos ministeriales. Se crearán mecanismos para estimular la concreción de inversiones relacionadas con el asociativismo regional o comunal y, en paralelo, se generarán incentivos para atraer y retener personas calificadas, como también para incentivar la migración a regiones e incluso desde el extranjero, tanto en el ámbito laboral como académico.

Este enfoque territorial también fue incorporado en el capítulo dedicado a los Derechos Ciudadanos, Superación de la Pobreza. Ahí se compromete a la creación de un Fondo para el Fortalecimiento de Comunidades en Situación de Pobreza.

Esto incluye, la aplicación –cada dos años– de la Encuesta CASEN con representatividad nacional/regional. Además la generación de un sistema Integrado de Información Social con desagregación territorial, que “permita realizar adecuadas caracterizaciones de las personas y familias, pero también de

las condiciones del entorno donde las personas realizan su vida cotidiana, trabajan o estudian que, como sabemos, son muy desiguales a lo largo y ancho del país”.


De ahí en adelante, incluso en los compromisos que la abanderada asumió para los primeros 100 días de su eventual gobierno, existe sintonía con las propuestas de Nueva Agenda Regional, destacando la creación de una comisión presidencial que generará un cronograma de transferencia de servicios y capacidades a los gobiernos regionales; un plan de desarrollo de territorios rezagados y al menos una universidad pública en las regiones de Aysén y O’Higgins, entre otros puntos.

También ha hecho eco de la importancia de enfrentar la desigualdad territorial, la candidata Evelyn Matthei quien ha propuesto un tributo del 1% del monto de inversión de los grandes proyectos en directo beneficio de los territorios en que se instalen. En tanto, todo nuevo proyecto de inversión relevante, destinará el 10% que tiene para pagar por concepto de impuesto a la renta a la región donde producen utilidades.

Ambas candidatas –además– apuntan a un incremento en los recursos de inversión de los Gobiernos Regionales, asignados directamente por la Ley de Presupuesto nacional.

A la elección directa de Intendentes Regionales y al fomento de la descentralización vía federalismo atenuando, el abanderado del Partido Progresista Marco Enríquez-Ominami, incorpora la redefinición de la asignación de recursos que entrega el gobierno a las regiones.

También plantea en su programa para los próximos cuatro años, introducir un mecanismo de corrección monetaria según el costo de la vida en cada territorio y la generación de un sueldo mínimo regional, esta última medida en sintonía con propuesta de empleo de Nueva Agenda Regional.

El candidato independiente Franco Parisi, amplía la elección directa de autoridades a los niveles de gobernadores y Secretarios Regionales Ministeriales, incorporando como requisito básico de postulación el haber vivido al menos cinco años en el territorio que desea representar. A esta iniciativa se agrega el reembolso del IVA en regiones extremas. 

Más información en:

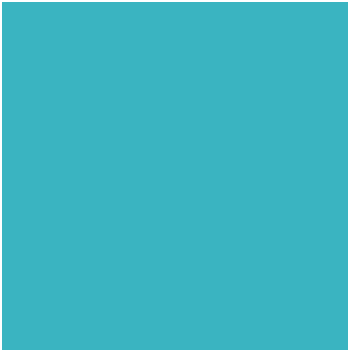
www.rimisp.org/contenido/propuestas-candidatos-presidenciales/



ESTO PROPONEN LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES PARA TERMINAR CON EL CENTRALISMO EN CHILE

¿ES SUFICIENTE PARA QUE LAS #REGIONES AHORA TERMINEN CON LA DESIGUALDAD?

 MICHELLE BACHELET	 MARCEL CLAUDE	 MARCO ENRIQUEZ OMINAMI	 RICARDO ISRAEL	 TOMÁS JOCELYN HOLT	 EVELYN MATTHEI	 ROXANA MIRANDA	 FRANCO PARISI	 ALFREDO SFEIR
---	--	---	---	---	---	---	--	--



Inversiones Agroindustriales:

¿Un instrumento para la cohesión territorial?

Investigación del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo describe la distribución espacial de las inversiones privadas en la agroindustria alimentaria en México, Perú y Chile en el periodo post-liberalización, para analizar si la actual ubicación está contribuyendo o no a un desarrollo territorialmente más equilibrado.

La Investigadora Adjunta de Rimisp Chiara Cazzuffi, explica que el objetivo del proyecto es generar conocimientos e incidir en políticas referidas a la relación existente entre inversiones privadas agroindustriales y las desigualdades territoriales en esos tres países, desde la perspectiva del desarrollo con cohesión territorial.

Uno de los estudios que se está llevando a cabo en el marco del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo es “Inversiones Agroindustriales: ¿Un instrumento para la cohesión territorial?”, cuyos focos son abordar la distribución espacial de las inversiones privadas en la agroindustria alimentaria en México, Perú y Chile, en el periodo desde mediados de la década del '90, y analizar sus efectos socio-económicos, para poder determinar si la actual distribución aporta a un desarrollo espacialmente equilibrado o si, al contrario, favorece los procesos de concentración territorial de la actividad económica.

El equipo de investigadores está integrado por Isidro Soloaga, de la [Universidad Iberoamericana](#) de México y Mariana Pereira, del [Colegio de México \(COLMEX\)](#); Roxana Barrantes, del [Instituto de Estudios Peruanos](#); y Chiara Cazzuffi, Yessica Lagos y Julio Berdegué, de [Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural](#), en Chile.

El proyecto, según su coordinadora e Investigadora Adjunta del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo, Chiara Cazzuffi, tiene como propósito “generar conocimientos en un área con poca literatura disponible, y también lograr la incidencia en políticas referidas a la conexión que existe actualmente entre las inversiones privadas agroindustriales y las desigualdades territoriales en los tres países considerados por el estudio, desde la perspectiva del desarrollo con cohesión territorial”.

Es sabido que hay poderosas razones que incentivan la aglomeración espacial de las actividades económicas y de la población en ciudades de gran tamaño. La actividad agroalimentaria, sin embargo, tal vez podría responder a otra lógica de localización espacial: las empresas que procesan materias primas de origen agrícola podrían tener menores incentivos para localizarse en los grandes centros metropolitanos, donde sus encadenamientos con el sector agrícola son más débiles y pueden afrontar deseconomías de aglomeración, y mayores incentivos a localizarse en espacios intermedios estrechamente conectados con los territorios rurales.

El proyecto postula que el sector agroindustrial tiene el potencial de contribuir a un desarrollo económico más descentralizado, que genere oportunidades y empleos en zonas más amplias del país que lo que se observa en otros sectores de la economía, además de ofrecer una opción importante para agregar calidad a la estructura productiva y al empleo de los territorios rurales y rurales-urbanos, donde se concentra cerca del 65% de la población latinoamericana.

Pero a pesar de la alta cifra de población que vive en zonas no-metropolitanas y de su potencial para la cohesión territorial, explica Cazzuffi, “no existe mucha información en referencia a si la inversión agroindustrial que se observa en estos países estudiados ha tendido a aumentar o a disminuir las brechas de desarrollo entre sus territorios. Yo creo que eso se explica por varios motivos. Primero, puede haber un sesgo en el debate científico que dice que la concentración de la actividad económica es muy positiva para el desarrollo, entonces la discusión se enfoca más en analizar cómo se genera o qué es lo que la favorece. En este debate recién está empezando la conciencia de que niveles muy altos de aglomeración pueden generar más costos que beneficios para un país. Segundo, los estudios existentes tienden a enfocarse o en la agricultura primaria o en la industrialización como instrumento para el desarrollo. Pero son relativamente pocos los estudios que consideran distintos tipos de industria, a pesar de que la manufactura no es toda igual y sectores distintos pueden tener implicancias distintas para el desarrollo”.

Agroindustria, ruralidad y cohesión territorial

La Investigadora Adjunta de Rimisp opina que, con las condiciones adecuadas, la estrecha relación de la agroindustria con el medio rural “puede mejorar el empleo en las zonas rurales y esto, a su vez, puede reducir los niveles de pobreza. Entonces, en la medida en que la agroindustria se va localizando en zonas que son relativamente más rezagadas y que van mejorando las condiciones de estos territorios, pensamos que puede contribuir al objetivo de cohesión territorial que buscamos”.

Cazzuffi explica que el estudio “Inversiones Agroindustriales: ¿Un instrumento para la cohesión territorial?” definió tres etapas. La primera, y en la cual se está en este momento, es descriptiva y es la que analiza la distribución de las agroindustrias en el territorio a mediados de los años '90, para ver si estas se distribuyen de manera menos concentrada alrededor de las grandes ciudades metropolitanas. De igual modo, “se indagará los factores que parecen correlacionados con el crecimiento en el número de empresas y en el ingreso por ventas de las agroindustrias”. El objetivo principal de esta etapa es entender si las empresas agroalimentarias muestran menor concentración en o cerca de los grandes centros urbanos y mayor concentración en espacios intermedios o “rural-urbanos”.

Una segunda etapa, profundizará en el tema de la localización tratando de identificar determinantes de la localización, “mediante un análisis econométrico de características del territorio que parecen favorecer el crecimiento en número de empresas y en ingresos por ventas de las agroindustrias”. El objetivo principal es contribuir a la identificación de variables de política relevantes en las decisiones de localización, y en las cuales los decisores públicos se podrían concentrar si deciden potenciar sector agroalimentario como una opción de desarrollo deseable y eficiente para un territorio. Evidentemente, lo que importa es saber si existen variables de política que no sean contradictorias con los objetivos de eficiencia de los propios empresarios, además de ser favorables a la descentralización de la actividad económica; necesitamos ver si hay posibles políticas que puedan contribuir a ese resultado en que ganan tanto los empresarios y los trabajadores de esas empresas, como la sociedad en su conjunto.

La tercera etapa se preocupará de los impactos socioeconómicos de la presencia de la agroindustria en un territorio, con énfasis en empleo y pobreza. “En la parte de empleo queremos estimar cuál es la capacidad de la agroindustria de generar empleo en otros sectores de la economía. Por ejemplo una expansión de la agroindustria puede aumentar el empleo en servicios y queremos comparar esto entre la agroindustria y otros sectores de la manufactura. En la parte de pobreza queremos ver si el crecimiento de la industria agroalimentaria tiene una mayor capacidad de reducir la pobreza comparado con otros sectores de la manufactura”, describe.

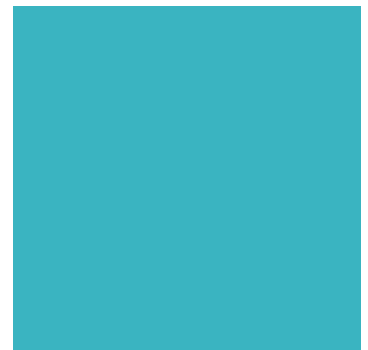




Foto Scott Wallace – World Bank

En todas las etapas, se hará un análisis desagregado por tamaño de empresa, para investigar si empresas pequeñas, medianas y grandes se comportan de manera similar o distinta. Las interrogantes del estudio serán respondidas de manera cuantitativa y de igual forma se realizarán estudios de casos exploratorios con empresarios, “para tener una idea de sus motivaciones para localizarse donde están hoy. Eso lo haremos en comunas que en los últimos años han vivido cambios fuertes en la presencia de la agroindustria, ya sea un fuerte crecimiento o fuerte decrecimiento”. La segunda parte de los estudios de caso considera entrevistas a un conjunto de actores para analizar otros factores que puedan ser relevantes y que el análisis cuantitativo no nos permite ver. Asimismo, se profundizará en los efectos socio-económicos de la presencia de la agroindustria, por ejemplo, con respecto al empleo de las mujeres y a impactos ambientales, tanto positivos como negativos.

Hallazgos de la primera etapa

En esta primera etapa, los hallazgos iniciales de la investigación muestran que la agroindustria, en los tres países estudiados, es un sector menos concentrado territorialmente que otros sectores de la manufactura. “Quizás en México la agroindustria está un poco más concentrada que en Perú y en Chile. En este último país, el 26% de la agroindustria está concentrado en la Región Metropolitana, versus casi el 58% del resto de la manufactura, es decir, mucha menor concentración”, ejemplifica.

Además, en los tres países se observa una difusión de la agroindustria en el tiempo hacia territorios con condiciones socio-económicas iniciales relativamente más bajas, lo que sugiere que la agroindustria podría ser una vía eficaz para incorporar territorios relativamente más rezagados a la econo-

mía nacional. Más adelante, en la tercera etapa del proyecto, se podrá ver si con posterioridad a la llegada de las agroindustrias, esos territorios que eran rezagados, dejan de serlo.

Un segundo hallazgo del proyecto es la gran importancia que ha tenido para el crecimiento del sector de la agroindustria la disponibilidad de materia prima. “Estar localizado cerca de la materia prima es fundamental. Con un poco de variación entre los países también resulta muy importante la disponibilidad de mano de obra. El sector de la agroindustria tiene un gran potencial para contribuir a reducir las desigualdades territoriales con eficiencia, justamente porque su estrecha conexión con las materias primas hace que se mantenga un vínculo fuerte con las zonas rurales y rural-urbanas. Eso nos hace pensar que, en las etapas siguientes del proyecto, podríamos ver que la agroindustria tiene buenos impactos en términos de generación de empleo y reducción de la pobreza y de las desigualdades territoriales”, indica la experta.

En relación con el rol que debiera desempeñar el sector privado en la actividad agroindustrial, para aportar a la reducción de las desigualdades territoriales en América Latina, Chiara Cazzuffi manifiesta que “sería importante que el sector privado tomara en cuenta el contexto del territorio en el cual se instala, en comparación al resto del país, y que considerara los potenciales costos, individuales y para el país, de contribuir a un proceso de aglomeración creciente de la actividad económica, y las potenciales ventajas de contribuir a un proceso de difusión de la actividad económica a lo largo del país”.

“Por otro lado, también es importante que los tomadores de decisiones y las políticas públicas aborden ciertas barreras a las cuales el sector privado se podría enfrentar si quisiera invertir en un territorio relativamente más rezagado que presente un buen potencial natural para la agroindustria. Por ejemplo, inversión en la capacitación de la mano de obra, en riego, en crédito para los agricultores que les permita aumentar su producción, en la calidad de la infraestructura de transporte y de otros servicios básicos como agua, electricidad y comunicaciones”, plantea. 🇲🇪

Chiara Cazzuffi es Doctora en Economía de la Universidad de Sussex (Reino Unido), Magister en Economía del Desarrollo de la Universidad de Sussex y Diplomada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas de la Universidad de Bologna (Italia).

Se ha especializado en desarrollo rural, acceso a mercados agrícolas, empresas cooperativas, evaluación de impacto, microeconometría, diseño y análisis de encuestas de hogares. Fue docente de Economía del Desarrollo, Economía Política del Desarrollo, e Historia Económica en la Universidad de Sussex.

En la actualidad es Investigadora Adjunta del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo de Rimisp.

Documentos de Trabajo programa Cohesión Territorial para el Desarrollo



Foto Pablo Corral Vega - Rimisp

Desde su puesta en marcha, el programa Cohesión Territorial para el Desarrollo ha ido generando una serie de documentos de trabajo con diagnósticos y propuestas de expertos convocados por el programa.

En estos, se abordan diversas temáticas y aristas relacionadas con las brechas de desigualdades territoriales que se registran en América Latina y estrategias para ir avanzando en el desarrollo de los territorios de la Región.

Documento N° 17

[Dinámicas Territoriales en Ecuador: Desarrollos claves en el período 2001-2011](#)

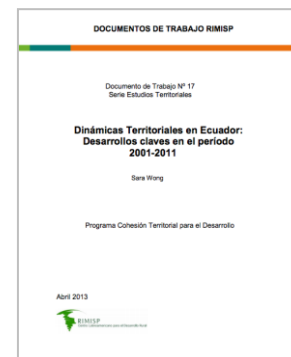
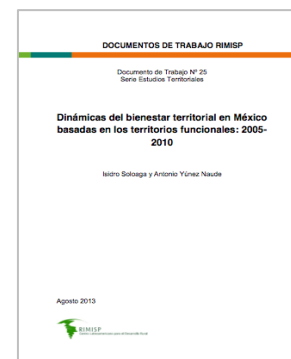
En este informe se puede observar que, a grandes rasgos, existe un marcado contraste en indicadores de salud, educación, NBI, pobreza, dinamismo económico, TICs, etc., entre zonas urbanas y rurales: las zonas urbanas, por lo general, muestran mejor desempeño. Solo en pocos indicadores (como la tasa de embarazo en adolescentes) las zonas rurales muestran datos menos preocupantes.

Así también hay, en general, un contraste entre las provincias de Guayas y Pichincha y el resto de provincias, en temas de dinamismo económico y empleo, en el cual las primeras muestran dinamismo o mayor dinamismo frente a la falta o menor dinamismo del resto. Provincias de la Sierra centro (Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo) y norte (Carchi) y de la región Amazónica suelen mostrar indicadores demográficos, de salud, de educación y económicos con un desempeño por debajo del promedio.

Documento N° 18

[Cohesión Territorial e inversión privada agroindustrial](#)

Las inversiones privadas pueden contribuir a generar y reforzar la desigualdad territorial. Por razones justificables y evidentes desde el punto de vista de las empresas, las inversiones tendrán la tendencia a concentrarse en lugares que ofrecen las mejores condiciones posibles de acceso a los mercados, de mano de obra, de infraestructura, de calidad institucional, etc. El interés del proyecto, en el cual trabajaron los investigadores Chiara Cazzuffi, Isidro Soloaga, Julio Berdegué, Roxana Barrantes, Jerico Fiestas y Yessica Lagos, es describir la distribución espacial de las inversiones privadas en la agroindustria alimentaria en Chile, México y Perú, sus causas y efectos socioeconómicos.



Documento N° 19

[Las Políticas de Desarrollo Productivo en Chile 1990 y 2012](#)

El informe elaborado por Graciela Moguillansky, Eduardo Ramírez y Andrea Furnaro presenta las principales políticas de desarrollo productivo que se han dado en Chile desde los años 90 hasta la actualidad. Además indica cómo estas políticas han repartido su gasto según esquemas regionales. Como finalidad se busca orientar acerca de cómo las políticas han incidido en las brechas sociales entre los territorios de Chile.

Documento N° 22

[Territorios funcionales de Nicaragua](#)

Esta investigación realizada por Tomás Rodríguez, Karla Bayres, Berman Martínez y Ligia Gómez tiene por objeto identificar los territorios funcionales de Nicaragua para que estos puedan ser considerados en las futuras propuestas de políticas, programas y proyectos públicos o privados.

Basados en el análisis de conglomerados, se han definido 30 territorios funcionales, los que a su vez se han tipificado según el peso de la población urbana y rural de los municipios convergentes y del territorio en su totalidad. Como resultado, se presentan 17 territorios rurales, 5 urbanos - rurales, 6 urbanos y 1 metropolitano. Para estos subgrupos, el presente informe presenta indicadores claves en distintos ámbitos socioeconómicos relevantes como son: Demografía, Ingreso, Pobreza, distribución de la riqueza, empleo, educación, vivienda, servicios, etnia, gobierno local y participación política y social.

Documento N° 23

[Políticas de protección social y superación de la pobreza para la inclusión social: una lectura crítica desde el enfoque de cohesión territorial](#)

En el documento de los autores María Ignacia Fernández, María Isabel Remy, John Scott y Fernando Carriazo, del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo, se analiza el rol que desempeñan las políticas sociales en la disminución, eliminación o mantención de las brechas territoriales de pobreza.

Para eso, se estudian específicamente las políticas de inclusión social espacialmente neutras que, por diseño y definición explícita, son de alcance nacional y no focalizadas en territorios específicos. El documento sostiene que dichas políticas, en los hechos, tienen impactos diferenciados en distintos tipos de territorios, ya que las políticas “espacialmente ciegas” en su diseño rara vez son “espacialmente neutras” en sus resultados.

Documento N° 24

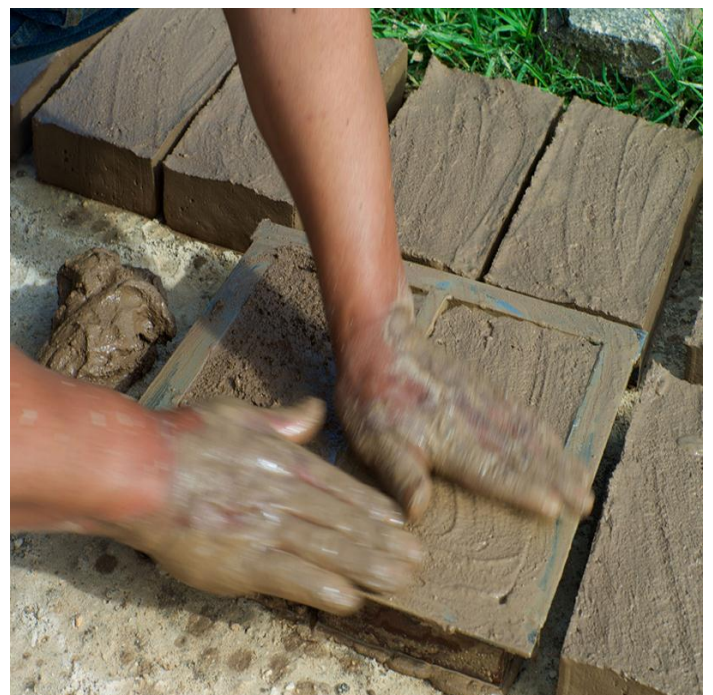
[Dinámicas del bienestar territorial en México basadas en municipios: 1990-2005-2010](#)

La publicación expone los resultados de los cambios entre 1990 y el 2010, en tres indicadores de desarrollo: consumo per cápita, pobreza alimentaria y desigualdad. Las estimaciones se obtuvieron para los planos nacional, rural, urbano y municipal. Los autores son Antonio Yúnez Naude, Jesús Arellano González y Jimena Méndez Navarro.

Documento N° 25

[Dinámicas del bienestar territorial en México basadas en los territorios funcionales: 2005-2010](#)

En este documento, los autores Isidro Soloaga y Antonio Yúnez Naude analizan los cambios en consumo per cápita, niveles de pobreza y desigualdad, a escala de territorios funcionales, es decir, de conjuntos de municipios cuyos habitantes tienen entre sí una alta frecuencia de interacciones sociales y económicas. En la primera parte se definen los territorios funcionales y sus características fundamentales. En la segunda, se presentan los resultados obtenidos para el año 2010 sobre los tres indicadores de bienestar estimados mencionados anteriormente. Por último se discute la dinámica de cambios en dichos indicadores en el periodo 2005-2010.



Agenda

Si usted desea anunciar actividades vinculadas con los temas de este boletín, publicaciones afines a temas de desarrollo y cohesión territorial y/o temáticas relacionadas a las mismas, escríbanos a:

ctd@rimisp.org

Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural se reserva el derecho de seleccionar los eventos, publicaciones y/o documentos a publicar en este boletín.



XVIII Congreso Mundial de Sociología de ISA

La vicepresidenta de la Asociación Sociológica Internacional (ISA, en inglés) Raquel Sosa, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), invita al congreso mundial de la asociación, para reflexionar acerca de los efectos de la desigualdad.

La actividad de este año lleva por título 'Enfrentando un mundo desigual: Desafíos para la sociología'.

Del 13 al 19 de julio de 2014 en Yokohama, Japón.

Más información en:

www.isa-sociology.org/congress2014/

European Development Days

La Comisión Europea organiza la reunión 'Días de desarrollo europeo' que incluye una sesión dedicada al desarrollo territorial y varias más relacionadas con salud, cambio climático, economía verde, democracia y género, entre otras temáticas.

La actividad se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre de 2013 en Bruselas, Bélgica.

Mayores informaciones en:

<http://eudevdays.eu/>